
UNA MAYORIA PARA EL CAMBIO: ACTORES, ESCENARIO Y GUIÓN

Jorge M. Reverte



3

Las elecciones del 28 de octubre de 1982 presentan novedades sustanciales respecto a las primeras elecciones del postfranquismo o, mejor dicho, respecto a los resultados de aquéllas, luego confirmados en 1979.

Pues, en verdad, las elecciones de 1977 tenían, en principio, un carácter enigmático por lo inusual de la experiencia, que hace forzoso en aquel caso el hablar de expectativas y resultados como cosas muy distintas. Comenzando desde la izquierda, hay que señalar, en primer lugar, que ahora no cabe esperar, como entonces cabía, que se produzcan sorpresas en la izquierda radical. La crisis de este área política ha sido devastadora, provo-

cando la desaparición de los grupos que, en 1977, parecían contar con mayores posibilidades de intervención, y reduciendo a los restantes al seguidismo del nacionalismo radical o al puro carácter testimonial.

Hay, ciertamente, una incógnita en el nacionalismo radical vasco. No obstante, se pueden señalar ciertos síntomas. Desde el momento en que ETA militar no ha podido encubrir apenas su desorientación

estratégica tras el 23 de febrero de 1981, cabe imaginar que a la histórica claridad de ideas exhibida por Herri Batasuna en aquellos momentos (cuando calificaron al intento de golpe de proyecto maquiavélico del gobierno de Madrid contra la izquierda *abertzale*) puede estar sucediendo un cierto despertar a la realidad, que implicaría, inevitablemente, la pérdida del proyecto originario y una cierta fatiga moral.

A esto ha debido contribuir la insólita evolución de Euskadiko Ezkerra, que rompiendo con el milenarismo tradicional del nacionalismo vasco ha redescubierto la política secular y tratado de desarrollar una estrategia de clase, cuyo primer fruto parece ser ya una tendencia a la reconversión de algunos de los sectores del activismo armado a la lucha política cotidiana y secularizada. Ciertamente Euskadiko Ezkerra no puede resolver, pese a su fusión con el EPK, el problema de la dualidad cultural y nacional del País Vasco, pero su política está creando las bases que podrían hacer posible el diálogo entre las dos comunidades que hablan de él.

En el resto de España, por lo demás, parece haberse perdido el espejismo de 1979 sobre la posibilidad de una proliferación de los nacionalismos de izquierda. El desastre del PSA en las elecciones autonómicas andaluzas ha puesto fin a muchos sueños, a la vez que echa sobre los hombros del PSOE la nada sencilla tarea de reconciliar reivindicaciones nacionales e intereses de clase en este país, singular ejemplo de cómo un complejo mosaico cultural puede sobreponerse a una sociedad dramáticamente desigual y polarizada en términos de clase.

Siguiendo desde la izquierda, y en segundo lugar, hay que señalar la crisis brutal que sufre otro milenarismo. La descomposición del PCE parece apuntar a la llegada del final histórico de la tradición

Euskadiko Ezkerra no puede resolver, pese a su fusión con el EPK, el problema de la dualidad cultural y nacional del País Vasco.

de la III Internacional. El eurocomunismo intentó ser un proyecto de reintegración de los partidos comunistas de los países capitalistas avanzados a la tradición del socialismo democrático, de la que el espejismo del Palacio de Invierno había arrancado a amplios sectores obreros e intelectuales que no habían podido asimilar el fracaso de la II Internacional ante la guerra imperialista de 1914, interpretándolo como fruto de un error doctrinal antes que como resultado de una inmadurez histórica. Pero ese proyecto de conciliación de dos experiencias tan contradictorias exigía un lucidez y una audacia teórica que difícilmente podían ser compatibles con los intereses creados de una dirección histórica.

El resultado ha sido, casi inevitablemente, la salida o marginación del PCE de aquellos cuadros renovadores que, por su experiencia en la lucha contra la dictadura, habían llegado a encarnar, en su propia sensibilidad y ante una buena parte de la opinión de izquierda, el sentido del proyecto eurocomunista. A la vez, paradójicamente, los sectores prosoviéticos, ciegos con envidiable fe a los aspectos más monstruosos y delirantes de los regímenes del Este, han decidido autoexcluirse o han sido excluidos del PCE ante la evidente incompatibilidad entre su credo estalinista y la línea de un partido que, precisamente por haber eliminado a su sector más coherentemente eurocomunista, necesita seguirse definiendo como tal y por contraposición al modelo soviético.

Por la derecha el espectro ha sufrido una modificación sustancial con la desintegración de UCD y de su campo político en cinco partidos de muy diferente pelaje: PDP, PDL, UCD, CDS, PAD. La voluntad progresista que ha demostrado el ex presidente Suárez al separarse del partido que él mismo se inventó y al que llevó al gobierno no puede ocultar, sin embargo, sus responsabilidades en la descomposi-

ción de lo que debería haber sido el partido de la derecha reformista. Suárez alteró una notable y respetable serie de ejemplos de voluntad de reforma con una serie no menos notable de virajes a la derecha que acentuaron las incoherencias de UCD, en vez de haber afirmado una línea consecuente que habría provocado la decantación de sus sectores derechistas hacia AP pero habría evitado al conjunto del país el vergonzoso espectáculo de personalismo y miopía política ofrecido por las fracciones de UCD en la primavera y el verano de 1982.

Lo cierto es que la crisis de UCD afecta, indiscutiblemente, a las posibilidades electorales de la derecha. El cansancio del país ante el evidente fracaso del gobierno de Calvo-Sotelo en ofrecer una alternativa a los problemas del país podría por sí solo haber inclinado al electorado a apoyar la formación de una nueva mayoría, una mayoría para el cambio. Pero el descrédito de UCD perjudica notablemente sus posibilidades como opción aparte y hace muy escasa su posible aportación a la *gran derecha* tan pregonada por don Manuel Fraga. Las incógnitas reales son la posible importancia del nuevo partido de Suárez y el hipotético avance de Alianza Popular, más o menos favorecido por algunas de las siglas resultantes del fracaso de UCD. Pero parece indudable, a juzgar por los últimos sondeos preelectorales, que un proyecto netamente neoconservador como el de Fraga no está, en estos momentos, en condiciones de aglutinar a la mayoría del país. Por lo demás, el mayor o menor peso que puedan alcanzar Fuerza Nueva y Solidaridad Española (el último fruto, de momento, de la tradición esperpéntica de la derecha española: el partido del golpismo) servirá para obtener una radiografía del país en la que se refleje con precisión la importancia de la extrema derecha y su composición interna. Pero no es probable que pueda modificar la relación de fuerzas global, favorable al

constitucionalismo, dentro de la derecha. Por muy presionado que se sienta desde los sectores ultras —si éstos, por ejemplo, logran tres o cuatro escaños— no es creíble que a estas alturas Fraga vaya a revisar su compromiso con la legalidad democrática.

Mientras que la derecha, a escala nacional, parece polarizada entre las opciones que representan Fraga y Suárez, en el País Vasco y Cataluña parece lógico suponer que las principales fuerzas conservadoras seguirán siendo, respectivamente, el PNV y Convergencia i Unió. La duda es saber si perderán fuerza por su presencia en el gobierno autonómico durante este período y en qué medida. A nadie se le oculta que una posible recuperación del PSE/PSOE y un avance significativo del PSC/PSOE harían difícil el mantenimiento de las actuales fórmulas de gobierno (basadas en un *orgulloso aislamiento* de las derechas nacionalistas) en ambas nacionalidades históricas.

El eje de un posible cambio de mayoría parlamentaria, en estos momentos, es, sin ninguna duda, el significativo aumento de los resultados socialistas al que parecen apuntar los sondeos preelectorales. El PSOE se ha convertido, para un gran número de españoles, en la única esperanza para sacar al país del *impasse* en que le ha dejado Calvo-Sotelo. Parece creciente la opinión de que España necesita una política coherente y estable de reformas políticas y económicas, sin la sucesión de avances y retrocesos a los que nos acostumbró el presidente Suárez en sus dos últimos años de gobierno, y más allá de la parálisis permanente que ha aquejado al gobierno en época de Calvo-Sotelo.

Ciertamente no puede considerarse negativo todo el balance del más reciente ejercicio de UCD. El Ministerio del Interior se ha apuntado algunos tantos en la lucha contra el terrorismo lo que, unido a

**El PSOE se ha convertido,
para un gran número de españoles,
en la única esperanza
para sacar al país
de impasse.**

la desorientación estratégica de ETA, parece abrir camino a las esperanzas de una pacificación del País Vasco. Incluso los niveles de delincuencia común parecen haber descendido lo que, sin duda, favorecerá a cualquier nuevo gobierno.

Por otra parte, la celebración del juicio del 23-F ha tenido efectos bastante positivos sobre el clima político. A consecuencia de su actitud a lo largo del proceso, los golpistas han visto derrumbarse su imagen entre aquellos sectores más descontentados de la opinión pública que en los últimos meses de 1980 parecían esperar la llegada de un nuevo *cirujano de hierro*. Incluso la coyuntura internacional, con el absoluto descrédito de la junta militar argentina, parece poco favorable al golpismo. En este contexto cobra sentido una maniobra tan grotesca como el intento de lanzamiento de un partido político (Solidaridad Española) encabezado por una persona que secuestró a punta de pistola al Congreso de los Diputados. Cuando los golpistas pretenden convertirse en parlamentarios se debe suponer que las propias bases del golpismo ponen en duda la viabilidad de un nuevo intento de fuerza.

Todo lo anterior permite confiar en que el nuevo gobierno partirá de una situación menos dramatizada que los anteriores, lo que, sin duda, constituye una estimable ventaja. Pero las tareas sociales, políticas y, sobre todo, económicas a las que deberá enfrentarse son, por el contrario, gigantescas y parece necesario hablar en este sentido de un espectacular fracaso de los gobiernos de UCD en la modernización del Estado, la sociedad y la economía españolas. El problema es que esas tareas de modernización, con el muy negativo peso de una situación mundial de recesión económica, guerras localizadas y creciente tensión entre los bloques, e incluso dentro de ellos, pueden recaer ahora en un gobierno socialista.

Parece indudable, en particular, que el paro y la crisis económica son, en estos momentos, las preocupaciones centrales de los españoles y que, por los resultados obtenidos en el intento de superar uno y otra, será juzgado un posible gobierno socialista, o de mayoría socialista, que se forme tras las elecciones de octubre de 1982. Ahora bien, las perspectivas económicas internacionales no permiten esperar milagros: no va a haber un relanzamiento de la economía mundial, y mucho menos un relanzamiento capaz de arrastrar a nuestra economía. ¿Qué puede hacer en estas circunstancias un gobierno socialista?

Se sabe al menos lo que *no* puede hacer. No puede aceptar la línea económica de la patronal y de la derecha, que consideran como política necesaria y suficiente la lucha contra la inflación y la contención de los salarios y del gasto público. Una política semejante agrava la crisis al debilitar la demanda, y aunque permite la recuperación de la tasa de ganancia no se traduce (ya lo hemos visto suficientemente en

estos años) en un relanzamiento de la inversión.

Para colmo de males, la misma derecha que preconiza el control del gasto público se opone con ferocidad a toda racionalización del gasto que suponga poner fin a la feudalización del sector público de la economía y los servicios. No es posible pretender centrar la contención del gasto en nuevos recortes del seguro de desempleo (en un país con dos millones de parados, de los cuales sólo uno de cada tres cobra el subsidio de paro) y negarse a apoyar una ley seria de incompatibilidades, una política de saneamiento de la administración pública, una lucha en profundidad contra la corrupción y los abusos en la Seguridad Social. Desgraciadamente, no es posible racionalizar el gasto público sin poner fin a los privilegios y hábitos de instrumentación privada de los

**La celebración
del juicio del 23-F
ha tenido efectos bastante
positivos sobre el clima
político.**

bienes públicos que el franquismo extendió entre amplios sectores y profesionales de la Administración.

**Hoy por hoy siguen
siendo necesarias políticas
de austeridad para
hacer frente
a la crisis.**

Más notable aún es que la patronal, mientras por una parte pretende que se cierre estrictamente el grifo de los fondos públicos, por otra se dirige a la Administración en demanda de ayuda financiera frente a la larga cadena de desastres empresariales provocados por la crisis económica y por la mala gestión privada. El argumento parece claro: sin transferencias del Estado los sectores en crisis irán a la quiebra, el paro crecerá aún más y el país estará cada vez más cerca de la bancarrota. Hasta aquí bien, pero misteriosamente los empresarios no parecen encontrar lógico que la utilización de esos fondos públicos sea fiscalizada por el Estado y los sindicatos. Ni hablar de planificación democrática de la economía, ni siquiera en aquellos sectores a los que la *iniciativa empresarial* ha llevado a la desinversión, la obsolescencia y la pérdida de competitividad. La patronal se niega a aceptar un control público de las transferencias destinadas a la salvación de las empresas privadas, como se niega a toda intervención del Estado y de los sindicatos en la orientación de las inversiones futuras.

Hay más cosas de las que ya se sabe que no se pueden hacer. No es posible intentar relanzar la demanda interior (mediante subidas salariales o potenciación del gasto público) en una situación de estancamiento del mercado mundial sin haber logrado antes avances sustanciales en la productividad y la competitividad exterior. En caso contrario el resultado inevitable es una fuerte inflación y un rápido crecimiento del déficit exterior. Hoy por hoy, siguen siendo necesarias políticas de *austeridad* para hacer frente a la crisis: no es cuestión de ideologías sino de realidades.

El resultado de este cuadro, desgraciadamente, es que de un posible gobierno

socialista no cabe esperar grandes milagros, ya que el espacio de movimiento que le queda es muy estrecho. Es preciso aumentar la cobertura del seguro de des-

empleo, por ejemplo, pero hay que hacerlo gradualmente, sin incrementar sustancialmente las cuotas de la Seguridad Social, ni el déficit del presupuesto del Estado. Eso implica medidas impopulares, por lo menos para los afectados, como subidas de los impuestos, lucha contra el fraude al seguro de desempleo, o agilización y racionalización de la burocracia del Estado y de la Seguridad Social.

Igualmente, es necesario llevar adelante a la vez una política de austeridad salarial y una estrategia de reconversión industrial que, si debe ser rápida y de bajos costos sociales, exige la intervención del Estado y de los sindicatos en la utilización de las transferencias y en la orientación y relanzamiento de las inversiones. Los resultados de esta doble política deben ser decisivos a medio plazo, pero por razones obvias no parece que a corto plazo puedan crear entusiasmo en nadie.

En resumen: un gobierno socialista no puede obtener, a corto plazo, resultados espectaculares. Un gobierno de izquierda que llega al poder en un momento de expansión económica puede tomar inmediatamente medidas igualitarias de importante impacto popular; ante una recesión corta de tipo keynesiano puede adoptar medidas para impulsar la demanda y obtener efectos apreciables casi inmediatamente; en una situación de pillaje colonial puede nacionalizar las fuentes de riqueza de la nación. Nada de esto puede hacer un gobierno socialista en España en 1982. Con un Estado al borde de la bancarrota cualquier medida igualitaria sólo llegará a tener repercusión a medio plazo; la crisis económica actual no es corta (como desgraciadamente ya hemos visto) ni keynesiana (como los socialistas franceses han demostrado involuntariamente); España

no es un país periférico y no resulta fácil imaginar ninguna nacionalización que pueda tener repercusiones inmediatas o, ni siquiera, despertar entusiasmos demagógicos.

En estas circunstancias hay dos cosas obvias. La primera es que la política económica de la izquierda en España deberá ser una apuesta por el medio plazo, eludiendo como la peste las medidas puramente espectaculares (amplias subidas salariales, fulminante extensión de la cobertura del seguro de desempleo) que pueden cobrarse la revancha a seis meses vista (en forma de inflación y más desempleo); la segunda es que este país va a pedir a un gobierno socialista, *a corto plazo*, alguna prueba de que es *un gobierno para el cambio*.

¿Y qué se puede hacer en este terreno? En primer lugar cabe suponer que una burocracia que resolviera problemas en vez de complicarlos sería un avance. Luego hay una serie evidente de medidas de orden público: si bajo un gobierno socialista la Policía Nacional machaca a una manifestación de ecologistas ante una central nuclear (a la manera, por poner un ejemplo, en que la Policía Municipal ya apaleó a un grupo de feministas *dentro* de un Ayuntamiento presidido por un alcalde socialista), o si un sospechoso de terrorismo muere a consecuencia de supuestos malos tratos, en suma, si las relaciones entre los cuerpos armados y el público no mejoran tras la formación de un gobierno socialista, será mejor ir haciendo las maletas o, al menos, cambiando de oficio.

También hay pendientes una serie de medidas de racionalización de la Administración y de la legislación. Hay un principio muy obvio, por ejemplo, según el cual no tiene sentido conceptual como delitos conductas comunes a una parte sustancial de la población y que sólo se reprimen en la práctica de forma excepcional. Cuando

se crea una situación de este tipo hay dos posibilidades. La primera es incrementar la represión, para lo cual es preciso que esto sea materialmente posible y que, además, sea moralmente ejemplar. La segunda es despenalizar la conducta social en cuestión y tratar de reducir su incidencia mediante la información y la educación, eliminando además sus peores consecuencias sociales a través de formas indirectas de control. Se deja a la imaginación del lector el adivinar en qué apartado entran mejor el fraude fiscal, el aborto y el consumo de drogas, dicho sea con puro afán ilustrativo.

La idea general, entonces, es que un gobierno socialista sólo podría arreglar la economía de este país a medio plazo, pero en cambio podría hacerlo mucho más viable —o cuando menos soportable— en un tiempo razonablemente breve. Ahora bien: eso exige una vasta colaboración social en dos sentidos. Es preciso, por una parte, que los movimientos y grupos sociales que están a favor de una modernización de nuestra sociedad no lleguen a enfrentarse con un gobierno socialista por impaciencias propias o errores o desconroles de dicho gobierno (por ejemplo: no convendría que el movimiento ecologista exigiera a un gobierno socialista el *inmediato* desmantelamiento de *toda* central nuclear, como tampoco convendría que un gobierno socialista anunciara una vigorosa revitalización del programa de centrales nucleares —en aras del interés nacional, o algo así— o que la Policía Nacional, volviendo a un ejemplo anterior, apaleara a unos pacíficos ecologistas concentrados frente a Almaraz o algún otro de esos dinosaurios inviables).

Pero, por otra parte, se precisan *cuadros* que hagan posible una mínima eficacia

**De un gobierno socialista
no cabe esperar grandes milagros,
ya que el espacio de movimiento
que le queda
es muy estrecho.**

en el gobierno socialista y que sean un cauce y no un obstáculo para el diálogo con los grupos y movimientos sociales a cuyas demandas debe dar respuesta dicho

gobierno. Estos cuadros deben poseer capacidad de gestión y experiencia en las nuevas formas de expresión de la política, y es bien conocido que el PSOE, pese a su

crecimiento durante los años 70, no posee un número suficiente de cuadros para responder ni cuantitativa ni cualitativamente a las exigencias de una práctica de gobierno.

Por fortuna nos encontramos en una coyuntura histórica realmente excepcional. En medio de la crisis política general que atraviesa España, un gobierno socialista puede beneficiarse de una afluencia más que notable de cuadros técnicos y políticos procedentes tanto del centro izquierda como del área comunista. El PAD, y en general los sectores realmente reformistas de la antigua UCD, pueden cumplir un papel fundamental en las tareas de un gobierno progresista, por su experiencia administrativa y técnica. Pero también una buena parte de la autodisuelta izquierda radical y de los *renovadores* del PCE poseen una vasta experiencia inapreciable para un gobierno de progreso. Han conocido desde su formación misma los nuevos movimientos sociales de la España de los años 60, están familiarizados con la problemática de sus bases y tienen, a la vez, una experiencia de gestión en los diferentes ámbitos que resulta irremplazable para integrar el esfuerzo de esos movimientos emergentes en el proyecto de un cambio mayoritario.

Por fortuna, ha sido el señor González (como todavía en 1977 le llamaba el pro-

**Este país va a pedir
a un gobierno socialista,
a corto plazo,
alguna prueba de que es un gobierno
para el cambio.**

fesor Tierno) quien primero ha descubierto la necesidad de contar con esos cuadros procedentes de la derecha reformista y del área comunista para hacer posible un proyecto socialista en este país. Sin su notorio carisma en el PSOE es posible que una propuesta semejante se hubiera visto sepultada bajo el peso conjunto de todos los sectarismos. Ahora la propuesta está ahí, y el problema es plasmarla en la práctica diaria. Hace falta una mayoría para el cambio, y una mayoría tanto cualitativa como cuantitativa.

Este país está ante una posibilidad excepcional. Pasado el onanismo autocompasivo del desencanto, con su jocoso acompañamiento de una lastimera legión de (aspirante a) políticos en paro, y parcialmente disipadas las nieblas del golpismo, España puede entrar en un período de gobierno democrático y de izquierda que ponga fin al retraso secular de nuestra sociedad y nuestro Estado haciendo, a la vez, dar un salto cualitativo sin precedentes a la fuerza y la representación de los trabajadores. Ahora podemos recuperar la distancia perdida y avanzar hacia la cabeza en la carrera de los países industrializados hacia el socialismo. La apuesta pasa en buena medida por la capacidad del PSOE para abrir posibilidades de colaboración a todos quienes, desde la sociedad civil o desde el gobierno, pueden contribuir a realizar esta posibilidad, y es mucha la responsabilidad porque quizá nunca vuelva a reunirse como ahora una constelación de condiciones tan favorables para tarea tan difícil y arriesgada.